

CONFIDENCIAL



SEMANARIO DE INFORMACION Y ANALISIS POLITICO • AÑO 9 • EDICION No. 407 • DEL 26 DE SEPTIEMBRE AL 02 DE OCTUBRE 2004

PORTADA

ARCHIVO

DIRECTORIO

CORREO

EN ESTA EDICION

POLITICA
ECONOMIA
AMERICA LATINA
DESDE SILICON
VALLEY
CENTROAMERICA
ANALISIS
NEGOCIOS
EN PANTALLA



CENTROAMERICA

El país que ya no somos

Jaime Ordóñez*



Costa Rica vive una doble fractura política y social, que ha empezado a desfigurar el pacto democrático del último medio siglo. No solo están fallando los políticos, sino, además, el sistema en su conjunto. A pesar del justificado estado de indignación ciudadana de los últimos días, parece la hora, sin embargo, de tener serenidad analítica para comprender la naturaleza dual de este problema. Es necesario saber dónde está el cáncer y extirparlo en su raíz y no contentarse con reprimir los síntomas. Y, además, hay que hacerlo por la vía democrática. Porque lo que está en juego no es el destino de nuestra desprestigiada clase política (a la que parece urgirle un relevo integral), sino algo más importante: la esencia de nuestro pacto democrático. Quizá haya llegado la hora de hacerle una cirugía mayor a nuestro Estado.

La fractura político-partidaria. Es la que está en la superficie y es la más evidente. Es la crisis de los partidos. Ciertamente, los partidos políticos se encuentran desgastados (algunos moribundos) y la población no se encuentra ya representada en ellos. Desideologizados, cada día más parecidos a vulgares grupos de poder (y permeados claramente por grupos de interés económico), parecen presa de las dos enfermedades típicas de las agrupaciones políticas del resto de América Latina. Por un lado, la pauperización y chabacanería intelectual de parte de sus dirigencias y activistas; por el otro, la corrupción. Salvando las distancias (no tenemos ejército, afortunadamente, y las brechas sociales son distintas), es muy parecido a lo que acaeció en Venezuela, en Perú y en Ecuador hace década y media. El resultado ya lo conocemos. Lo que ha sucedido con el PUSC en los últimos días es muestra de ello. El escándalo en el que está envuelto su más conspicuo y alto dirigente no solo es muy serio en su dimensión penal, sino hiere, además, el imaginario social.

Esto es, incluso, aún más grave. La corrupción de los caudillos (o los hijos de estos) y de aquellos que forman parte de la iconografía del poder en una sociedad tiene un valor trasgresor último: son los referentes sociales que funcionan como valor de cohesión. Su responsabilidad es eventualmente doble, penal y cívica. Ahora, bien el PLN y muchos de sus dirigentes también debería andar de puntillas y con sumo cuidado. El último escándalo de la CCSS tiene una larga cola de escándalos bipartidistas: los CAT, Fodesaf, el Fondo de Emergencia, Aviación Civil, el Banco Anglo, la nociva Ley 4-3 de instituciones autónomas, el injustificado régimen de pensiones de lujo de nuestra clase política. La memoria es chata ante tanto abuso en las últimas décadas.

Ciertamente, no todos los políticos y funcionarios públicos son corruptos, ni participan del tráfico de influencias. La mayoría de funcionarios de distintos niveles son honestos e, incluso, hay un puñado de ellos de altísima calidad profesional. Sin embargo —y quizá ha sido su principal problema— muchos han pecado por omisión, por taparse los ojos ante los síntomas de la corrupción. Callar es una forma de pecar. La única forma de refundar los partidos políticos (e, incluso, las instituciones del Estado) es empezar una limpieza integral, haciendo transparente toda la corrupción. En esto, todo funcionario deberá ser el primer garante y velador de la transparencia y la probidad en la función pública. Los partidos emergentes, el PAC y ML, también deberían tomar nota de lo que está sucediendo. Su eficacia ha sido baja. La pobrísima producción parlamentaria de los dos últimos años (que los incluye a ellos) desgasta también su imagen ante la ciudadanía.

TEMAS RELACIONADOS

[El país que ya no somos](#)

Jaime Ordóñez

[Don Abel en el aire](#)

Rodolfo Cerdas



La fractura de la adhesión democrática. Este problema es más hondo y preocupante y pertenece a la cuenta larga. Aquí sí hay que encender la luces de alerta. Significa que la ciudadanía en Costa Rica está perdiendo confianza en la democracia como sistema político. La erosión de lo que en su día Eanston, Lipset y Dahl llamaron adhesión difusa (confianza en el sistema democrático como tal) se ha agravado lentamente en el país. Ya Mitchel Seligson y Miguel Gómez hace 4 años informaron de la pérdida gradual de confianza de los ciudadanos en sus instituciones.

Pues bien, tal y como analizó Daniel Zovatto, el Latinobarómetro, capítulo Costa Rica, ofrece información reveladora. En la Costa Rica de 2004 solo un 48% de la población tiene satisfacción con la democracia, una disminución de 27 puntos en relación con el 75% del año 2002. Este sensible bajonazo podría leerse coyunturalmente si no existiesen otros datos que evidencian una fractura de la confianza más estructural. A un 42% de los ticos no les importaría vivir bajo un gobierno no democrático, siempre y cuando resuelva problemas económicos. Un 56% aceptaría una sociedad más ordenada, aunque se limiten algunas libertades y a un altísimo 78% le gustaría mayor mano dura en el gobierno. Ciertamente el porcentaje de rechazo al Ejército sigue siendo alto, pero los otros indicadores combinados nos indican que la democracia como sistema está fracturada en nuestro imaginario sociopolítico. El 91% de la población que creía en la democracia en los años 70 (con fuentes distintas al Latinobarómetro, pero con metodología similar) pertenece a una Costa Rica que casi ya no existe.

Un país atascado. Las implicaciones son evidentes. O empezamos a ejecutar con celeridad la reingeniería institucional pendiente desde hace muchos años o la realidad nos va a ganar. La lista de reformas que la actual clase política no ha ejecutado es larga: la Ley Orgánica de la Administración Pública, la creación de una Ley Marco de Planificación, Presupuestación y Rendición de Cuentas, la revisión del sistema electoral en su conjunto (hoy profundamente desgastado), la revisión y mejora de la Ley Marco de Transferencia de Competencias a los gobiernos municipales, la revisión del Reglamento y las normas operativas de nuestra Asamblea Legislativa, atascada en por realidad multipartidista para que lo no estaba preparada. Somos un país que no toma decisiones. Hacemos agua por todos lados: la legislación del sistema financiero es pre-moderna y posee vicios que generan un mercado de valores limitado y pre-diluviano. La reforma fiscal está aún pendiente, pero también los avances normativos en materia de control de gasto y lucha contra la corrupción. La Ley de enriquecimiento ilícito es un pequeño avance en este campo; sin embargo, parcial y con alguna normativa discutible.

Nuestro parlamento no ha sido capaz siquiera de promulgar el Reglamento que pueda instrumentar la figura del referéndum. La mejor manera de vacunarnos contra la trampa populista de referéndum de la calle es poner en práctica el referéndum constitucional. Empero, nuestros políticos siguen timoratos y autistas en este y otros temas. Si el sistema institucional y político no se renueva y ofrece válvulas de escape, el peligro de la frustración y el descontento puede ser caldo de cultivo para populistas de uno y otro signo. Todavía hay tiempo para usar la vía democrática, y resolver los problemas que demanda la población: disminución de la pobreza, empleo, seguridad ciudadana, inclusión social, educación. Ya no somos la Costa Rica bucólica de los años 60 y 70. Tenemos que tenerlo claro. Sin embargo, el país que vamos a ser lo tenemos que rediseñar ahora mismo.

* Político costarricense. Publicado en La Nación

▲ COMIENZO DE PAGINA

🖨️ IMPRIMIR ARTICULO

[PORTADA](#) • [ARCHIVO](#) • [DIRECTORIO](#) • [CORREO](#)

[POLITICA](#) • [ECONOMIA](#) • [AMERICA LATINA](#) • [DESDE SILICON VALLEY](#) • [CENTROAMERICA](#) • [ANALISIS](#) • [NEGOCIOS](#) • [EN PANTALLA](#)